



Economic and Social Council

Distr.: General
15 December 2024

Original: Spanish

Commission on the Status of Women

Sixty-ninth session

10–21 March 2025

**Follow-up to the Fourth World Conference on Women and
to the twenty-third special session of the General Assembly
entitled “Women 2000: gender equality, development and
peace for the twenty-first century”**

Statement submitted by Fundacion Pro Humanae Vitae, a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council*

The Secretary-General has received the following statement, which is being circulated in accordance with paragraphs 36 and 37 of Economic and Social Council resolution 1996/31.

* The present statement is issued without formal editing.



Statement

Honorable Comisión,

Considerando los ítems prioritarios y de revisión planteados para la evaluación de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con miras a la presentación de los resultados en la vigésima tercera sesión especial de la Asamblea General, así como los desafíos actuales que afectan su implementación y el avance hacia la igualdad de género, es necesario que la Fundación Pro Humanae Vitae, poseedora de estatus consultivo especial, haga mención especial a los siguientes puntos en atención a los requerimientos del presente resumen.

En la República Argentina, en particular, y en América Latina en general, hemos observado importantes avances en la implementación de la agenda post-Beijing +5. Estos avances han sido impulsados inicialmente por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y fortalecidos por la Agenda 2030, que en la actualidad allana el camino hacia una nueva renovación del Pacto Global. Dicho pacto permitirá un nuevo progreso en las condiciones de civilidad, especialmente en lo que respecta a los temas de género y diversidad, promoviendo el fortalecimiento de los derechos humanos en muchas regiones del mundo.

En Argentina, en particular, las políticas de género han sido pioneras en el contexto regional, abordando no sólo los aspectos jurídicos del reconocimiento de la diversidad y de nuevas formas de participación de la mujer en la vida social, política y económica, sino también en la acción represiva del Estado contra los crímenes de género. No obstante, es necesario señalar los aspectos en los que aún no se ha avanzado de manera significativa, lo cual constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos humanos en el país.

En el primer semestre de 2024, se registró un femicidio cada 29 horas en Argentina, según la Defensoría del Pueblo de la Nación. Este flagelo atenta directamente no solo contra la vida de las víctimas, sino también contra los avances logrados en materia de derechos humanos, derechos de las personas transgénero y de las diversidades en la sociedad argentina. En este marco, la educación se presenta como un pilar esencial para comprender, antes que nada, que los derechos de género y diversidad son derechos humanos básicos, consagrados no solo por tratados internacionales y la Plataforma de Acción de Beijing, sino también por la Constitución Nacional y los tratados que forman parte de ella.

Es imperativo implementar nuevos y mejores sistemas educativos que desestructuren y deconstruyan las masculinidades tradicionales que nuestra sociedad aún produce. Para ello, es menester fortalecer y comprender la importancia de la inversión económica en procesos educativos, con un enfoque claro en la perspectiva de género, transversal a todas las políticas aplicadas desde el Estado nacional, provincial y local.

Asimismo, es necesario que las 24 provincias que componen la República Argentina trabajen conjuntamente en legislaciones específicas que aborden estas problemáticas. La justicia argentina debe promover modificaciones legislativas que se traduzcan en leyes que protejan de manera más efectiva a las mujeres, no solo en casos de violencia de género que atentan contra la vida, sino también en términos de derechos laborales, igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la garantía de derechos para todas las diversidades. Estas medidas son indispensables para cerrar las brechas de género y diversidad en el contexto nacional.

En la situación actual de la República Argentina, la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, junto con la desaparición del INADI, que funcionaba como un instrumento clave contra la discriminación y donde

muchas denuncias estaban relacionadas con problemáticas de género, ha generado una grave preocupación. Hoy, la provincia de Buenos Aires es la única de las 24 provincias del país que cuenta con un ministerio específico dedicado a las Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que resalta la necesidad de una articulación público-privada para impulsar acciones que incidan en las políticas estatales.

Con este llamado, reafirmamos nuestra convicción de que solo a través del diálogo, la cooperación y la acción concreta podremos alcanzar los avances necesarios para construir una sociedad más equitativa. Por ello, consideramos fundamental que, especialmente en el ámbito nacional, se restauren prontamente los organismos y la burocracia estatal necesarios para fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Solo mediante esta recuperación institucional se podrán consolidar las herramientas que protejan y promuevan estos derechos en todo el territorio nacional.
